



Del enfoque normativo al enfoque documental: la reforma 2026 a las Reglas de la LFPIORPI / From Regulatory Focus to Documentary Compliance: The 2026 Reform to the LFPIORPI Rules

Marco Antonio Gonzalez Reynoso¹

El 7 de agosto de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 115/2026, mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reforma de manera integral las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que se encontraban vigentes, y han tenido modificaciones parciales, desde 2013. La reforma entrará en vigor el 30 de noviembre de 2026, con un régimen de implementación escalonada que se extiende hasta 2028.

El objeto de estas Reglas es doble: por un lado, buscan establecer las medidas y procedimientos mínimos que deben observar quienes realizan Actividades Vulnerables para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita; por otro, fijar los términos y modalidades para la presentación de Avisos e Informes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Lo que cambia sustancialmente con esta reforma no es dicho objeto, sino la arquitectura normativa e institucional dispuesta para alcanzarlo.

On August 7, 2026, Agreement 115/2026 was published in the Official Gazette of the Federation (Diario Oficial de la Federación), through which the Ministry of Finance and Public Credit (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) comprehensively reformed the General Rules referred to in the Federal Law for the Prevention and Identification of Operations with Resources of Illicit Origin (LFPIORPI), which had been in force, with partial amendments, since 2013. The reform will enter into force on November 30, 2026, under a phased implementation regime extending through 2028.

The purpose of these Rules is twofold: on one hand, they seek to establish the minimum measures and procedures that must be observed by those who carry out Vulnerable Activities in order to prevent and detect acts or transactions involving resources of illicit origin; on the other, to set the terms and modalities for filing Notices and Reports with the Financial Intelligence Unit (UIF). What changes substantially with this reform is not that purpose, but the regulatory and institutional architecture designed to achieve it.

¹Maestro en Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Maestro en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla. Corredor Público No. 80 de la Plaza de la Ciudad de México. marco@gonzalezreynoso.com. / Master of Laws (LL.M.) in International Business Law from Universidad Iberoamericana. Master's Degree in Criminal Law from the University of Seville. Public Broker No. 80 for the Mexico City Jurisdiction.



La adición más estructural es el nuevo Capítulo II Quáter, "Enfoque Basado en Riesgos", que obliga a quienes realizan Actividades Vulnerables a diseñar e implementar una metodología propia de evaluación de riesgos. Dicha metodología debe considerar, al menos, el tipo de acto u operación, el tipo de cliente, los países o áreas geográficas involucradas y los canales de transacción; debe alinearse con la Evaluación Nacional de Riesgos que publique la UIF, revisarse y actualizarse cuando menos cada doce meses, documentarse por escrito y conservarse durante un mínimo de diez años.

En estrecha relación con lo anterior, en esta reforma se exige clasificar a cada cliente o usuaria en al menos tres grados de riesgo (bajo, medio y alto), con reevaluación semestral y medidas de debida diligencia reforzada para los clientes de riesgo alto y para las Personas Políticamente Expuestas (PEP). El Capítulo III Quáter, por su parte, regula el uso de la aplicación "Consulta PEP 2.0" para la identificación de este tipo de personas.

También se incorpora un capítulo en el que por primera vez se establece un orden de prelación expreso para identificar al Beneficiario Controlador de personas morales: (i) titularidad directa o indirecta del 25% o más del capital social; (ii) control efectivo por otros medios relacionados con la estrategia y toma de decisiones; y (iii) la posición de funcionario administrativo de mayor jerarquía, cuando los criterios anteriores

The most structural addition is the new Chapter II Quáter, "Risk-Based Approach," which requires those who carry out Vulnerable Activities to design and implement their own risk assessment methodology. Such methodology must consider, at a minimum, the type of act or transaction, the type of client, the countries or geographic areas involved, and the transaction channels; it must align with the National Risk Assessment published by the UIF, be reviewed and updated at least every twelve months, be documented in writing, and be retained for a minimum of ten years.

Closely related to the foregoing, this reform requires classifying each client or user into at least three risk levels (low, medium, and high), with semi-annual reassessment and enhanced due diligence measures for high-risk clients and for Politically Exposed Persons (PEPs). Chapter III Quáter, in turn, regulates the use of the "Consulta PEP 2.0" application for identifying such individuals.

For the first time, a chapter is also incorporated that establishes an express order of precedence for identifying the Beneficial Owner (Beneficiario Controlador) of legal entities: (i) direct or indirect ownership of 25% or more of the capital stock; (ii) effective control through other means related to strategy and decision-making; and (iii) the position of the highest-ranking administrative officer, when the



no permitan la identificación. Para el caso de fideicomisos, se detallan criterios específicos de control efectivo sobre los bienes fideicomitidos.

Del mismo modo, el Capítulo X, "Del Manual de Políticas Internas", detalla por primera vez el contenido mínimo obligatorio de dicho manual en catorce fracciones, que van desde los criterios de identificación de clientes hasta los mecanismos de control interno y confidencialidad.

Una de las adiciones de mayor calado práctico es el nuevo Capítulo XIV, "De la Auditoría" (artículos 42 a 51), que introduce la obligación de someter el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero a un dictamen anual, emitido por auditoría interna o por auditor externo independiente según el grado de riesgo de quien realiza la Actividad Vulnerable. El dictamen debe seguir una estructura de siete secciones y calificar el cumplimiento de cada obligación conforme a una escala de cinco resultados (cumple, cumple mayoritariamente, cumple parcialmente, no cumple, no aplica), debiendo entregarse a más tardar el último día hábil de marzo de cada año y conservarse por cinco años.

Finalmente, el nuevo Capítulo XII exige la implementación de programas de capacitación anual y de procedimientos de selección de personal, incluyendo declaraciones firmadas sobre la ausencia de antecedentes penales de carácter patrimonial.

preceding criteria do not allow for identification. For trusts, specific criteria for effective control over the trust assets are detailed.

Likewise, Chapter X, "On the Internal Policies Manual," details for the first time the mandatory minimum content of said manual across fourteen sections, ranging from client identification criteria to internal control and confidentiality mechanisms.

One of the additions with the greatest practical impact is the new Chapter XIV, "On the Audit" (Articles 42 to 51), which introduces the obligation to submit compliance in anti-money laundering matters to an annual opinion (dictamen), issued by internal audit or by an independent external auditor depending on the risk level of the entity carrying out the Vulnerable Activity. The opinion must follow a seven-section structure and rate compliance with each obligation on a five-result scale (complies, mostly complies, partially complies, does not comply, not applicable), and must be delivered no later than the last business day of March each year and retained for five years.

Finally, the new Chapter XII requires the implementation of annual training programs and personnel selection procedures, including signed statements regarding the absence of a criminal record for property-related offenses.



En cuanto al régimen transitorio, el Acuerdo entra en vigor el 30 de noviembre de 2026; la metodología de riesgos y el Manual de Políticas Internas actualizado deberán estar disponibles a partir del 1 de marzo de 2027; los mecanismos automatizados, a más tardar el 1 de junio de 2027; la consulta de PEP, nueve meses después de la entrada en vigor; y el primer periodo de auditoría anual comprenderá el ejercicio 2028.

Cabe apuntar, a manera de balance, que el propio nombre de la ley remite a la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita como su objeto central. Sin embargo, del contenido de esta reforma se desprende que la proporción mayor de las disposiciones adicionadas —metodologías documentales, manuales, mecanismos automatizados, auditorías y programas de capacitación— constituye infraestructura de cumplimiento y evidencia documental, antes que medidas sustantivas de detección de operaciones ilícitas en sí mismas. Corresponderá a la práctica, así como a la supervisión que ejerzan el SAT y la UIF, determinar si este robustecimiento procedimental se traduce efectivamente en una mejor identificación de las operaciones que la ley busca prevenir.

Regarding the transitional regime, the Agreement enters into force on November 30, 2026; the risk methodology and the updated Internal Policies Manual must be available as of March 1, 2027; automated mechanisms, no later than June 1, 2027; the PEP consultation, nine months after the entry into force; and the first annual audit period will cover fiscal year 2028.

It is worth noting, by way of assessment, that the very name of the law refers to the prevention and identification of operations with resources of illicit origin as its central purpose. However, the content of this reform shows that the larger proportion of the added provisions—documentary methodologies, manuals, automated mechanisms, audits, and training programs—constitutes compliance infrastructure and documentary evidence, rather than substantive measures for detecting illicit transactions themselves. It will be up to practice, as well as to the oversight exercised by the SAT and the UIF, to determine whether this procedural strengthening effectively translates into better identification of the transactions that the law seeks to prevent.